



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: EJECUTIVO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-024-2022-00250-01 (E2-23-145)
Accionante: CLARA VICTORIA MARTÍNEZ ARREDONDO
Accionada: JOSÉ DARÍO GUEVARA OSORIO y ELVIA DEL SOCORRO BEDOYA
Procedencia: JUZGADO VEINTICUATRO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Asunto: MANDAMIENTO DE PAGO

En Medellín, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-024-2022-00250-01 (E2-23-145), instaurado por CLARA VICTORIA MARTÍNEZ ARREDONDO en contra de JOSÉ DARÍO GUEVARA OSORIO y ELVIA DEL SOCORRO BEDOYA con el objeto de decidir el recurso de apelación formulado por JOSÉ DARÍO GUEVARA OSORIO y ELVIA DEL SOCORRO BEDOYA, contra el auto mediante el cual libró orden de pago, proferido el 24 de junio de 2022 por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín.

1. ANTECEDENTES

La señora CLARA VICTORIA MARTÍNEZ ARREDONDO, actuando a través de apoderada judicial, promovió demanda ejecutiva en contra de JOSÉ DARÍO GUEVARA OSORIO y ELVIA DEL SOCORRO BEDOYA, en procura de obtener el cumplimiento de las obligaciones de contenido económico originadas en el contrato de prestación de servicios profesionales de abogado suscrito el pasado 21 de agosto de 2008, reclamando en síntesis:

“El 40% (cuarenta por ciento) DE LO RECAUDADO de la SENTENCIA ADMINISTRATIVA DE REPARACIÓN DIRECTA, DIRECTA(sic) bajo el radicado Nro.05001-23-31-000-2008-01419-01, del 24 de mayo del 2017, del CONSEJO DE ESTADO, mediante el cual se condenó a la NACIÓN- FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, RAMA JUDICIAL a pagar a favor del demandante (JOSE ALEJANDRO GUEVARA BEDOYA) las siguientes sumas de dinero: Por perjuicios morales para JOSE DARÍO GUEVARA OSORIO y ELVIA DEL SOCORRO BEDOYA FRANCO la suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno. Que dicho porcentaje deberá pagarse de acuerdo a los perjuicios que se les condenó a la entidad demandada en la sentencia antepuesta, teniendo en cuenta la indexación a la fecha del presente año en el que se cancelará la sentencia a LOS

DEMANDADOS, incluyendo los intereses moratorios que serán cancelados a LOS DEMANDADOS del pago de la sentencia por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL”.

Del mismo modo, peticionó se libraré orden de pago en contra de las accionadas por cuenta de las costas que se causaran dentro del proceso ejecutivo.

Como fundamento de sus pedimentos, indicó que ejerció la defensa de los ejecutados dentro del proceso de reparación directa que aquellos impetraron en contra de la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA y la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA REAMA JUDICIAL, actuación judicial cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, con el RUN 05001-23-31-000-2008-01419-00; para efectos de lo anterior, celebraron contrato por prestación de servicios profesionales de abogado y donde se pactó como honorarios una suma igual al 40% de lo recaudado por vía administrativa o judicial.

Afirma el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado, en primera y segunda instancia, respectivamente, accedieron a los pedimentos y en consecuencia, dispensaron los perjuicios morales reclamados en cuantía de 20 SMMLV para cada uno de los pretensores; que luego de desarrolladas las diligencias para obtener el pago de la condena, tuvo conocimiento que para la primera semana de julio de 2022 se cumpliría efectivamente la obligación contenida en la decisión judicial, sin embargo, los aquí ejecutados le otorgaron poder a otro profesional del derecho en este estadio de la gestión y sin notificarle la revocatoria de quien detentaba el mandato. Finalmente aduce que, el contrato de prestación de servicios comporta una obligación insoluta, que es clara, expresa y actualmente exigible.

1.1. Trámite de primera instancia

La solicitud de ejecución fue radicada en el despacho de primer grado el 15 de junio de 2022, (doc.01, carp.01), correspondiendo su conocimiento al Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín.

1.2. Decisión de Primera Instancia

El juzgador de instancia en auto del 24 de junio de 2022 (doc.03, carp.01), resolvió librar orden de pago a favor de la promotora señora CLARA VICTORIA MARTÍNEZ ARREDONDO y en contra de JOSÉ DARÍO GUEVARA OSORIO y ELVIA DEL SOCORRO BEDOYA en los términos solicitados, ordenando puntualmente:

PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por la vía ejecutiva a favor de la profesional del derecho CLARA VICTORIA MARTINEZ ARREDONDO identificada con cédula de ciudadanía N° 43.869.594 en contra de JOSÉ DARÍO GUEVARA OSORIO identificado con cedula de ciudadanía N° 71.660.089, y ELVIA DEL SOCORRO BEDOYA identificada con cedula de ciudadanía N°43.529.915 por las siguientes sumas:

Por el 40% de la condena impuesta a la NACIÓN-FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, RAMA JUDICIAL a favor de JOSÉ DARÍO GUEVARA OSORIO y ELVIA DEL SOCORRO BEDOYA, en sentencia proferida el 24 de octubre de 2012, por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala de Descongestión, en la acción de reparación directa tramitada con radicado 05001-23-31-000-2008-1419-00, modificada en segunda instancia, por la sentencia proferida el 24 de mayo de 2017, por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, subsección C.

1.3. Recurso de Apelación

La procuradora judicial de JOSÉ DARÍO GUEVARA OSORIO y ELVIA DEL SOCORRO BEDOYA inconforme con la decisión, interpuso recurso apelación, en procura de que se revoque la decisión adoptada en la primera instancia, y, en consecuencia, se niegue el mandamiento de pago deprecado (doc.09, carp.01).

Con tal propósito asevera, en lo fundamental, que la aquí ejecutante se encontraba inhabilitada para ejercer la profesión de la abogacía y para litigar en contra de la Nación, dada su calidad de servidora pública. Adicionalmente, recalca que “...la acción que pretende para cobrar los honorarios lo hace sobre un dinero que aun(sic) no ha sido entregado a los beneficiarios y adicionalmente sin haber dado cumplimiento pleno y estricto al contrato por prestación de servicios, lo que convierte el título de recaudo en un título(sic) que no cumple con los requisitos exigibles del título”.

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación se admitió el 26 de junio de 2023 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 04 de julio del mismo año (doc.02, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1o del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito que estimaren pertinentes.

La vocera judicial de la impulsora da inicio a sus alegaciones, sosteniendo que contrario a lo argüido en el recurso de alzada, el título ejecutivo es actualmente exigible con la expedición de la Resolución 1533 del 22 de julio de 2022, proferida por el Director Ejecutivo de Administración Judicial de la Rama Judicial, en la cual liquida y da cumplimiento a la sentencia dictada en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a más de que, a su juicio, existe una

indebida sustentación del recurso de impugnación por falta de cuestionamiento del auto que libró la orden de pago (doc.04, carp.02). Los ejecutados guardaron silencio.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por JOSÉ DARÍO GUEVARA OSORIO y ELVIA DEL SOCORRO BEDOYA, advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del auto impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala, se contrae a determinar si el ejercicio ponderativo vertido en la providencia impugnada que libró orden de pago en contra de JOSÉ DARÍO GUEVARA OSORIO y ELVIA DEL SOCORRO BEDOYA, responde a los presupuestos formales que conforman todo título ejecutivo y, por tanto, si hay lugar a ordenar la satisfacción de las obligaciones contenidas en el contrato por prestación de servicios profesionales de representación judicial que fuera celebrado por las partes.

2.2. Sentido del Fallo

La Sala revocará íntegramente la decisión impugnada, en atención a que, el título ejecutivo complejo invocado como base de la ejecución, adolece de los requisitos formales previstos en el artículo 100 del CPTSS y 422 CGP; al punto que, la obligación que concierne al pago de honorarios pactados no se entiende actualmente exigible, en tanto en cuanto, se supeditó al pago efectivo de las sumas dinerarias que resultaran en favor de los señores JOSÉ DARÍO GUEVARA OSORIO y ELVIA DEL SOCORRO BEDOYA, condicionamiento que no se verifica en el caso de marras.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de

los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que entre los señores JOSÉ DARÍO GUEVARA OSORIO y ELVIA DEL SOCORRO BEDOYA y la abogada CLARA VICTORIA MARTÍNEZ ARREDONDO celebraron el 21 de agosto de 2007 contrato por prestación de servicios profesionales con el objeto de reclamar el resarcimiento de *“los perjuicios (MATERIALES Y MORALES) ocasionados por la retención(sic) preventiva y privación de la libertad de nuestro hijo JOSE ALEJANDRO GUEVARA BEDOYA”*; que las partes pactaron como honorarios una suma igual al *“CUARENTA POR CIENTO (40%) DER(sic) LO RECAUDADO, bien por la vía administrativa, ora por la vía judicial”* (págs.10 a 11, doc.02, carp.01); que la Sala Cuarta de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en proveído del 24 de octubre de 2012 concedió las aspiraciones de JOSÉ DARÍO GUEVARA OSORIO y ELVIA DEL SOCORRO BEDOYA (págs.13 a 56, doc.01, carp.01), y que la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia del 24 de mayo de 2017 modificó las condenas impuestas en primera instancia (págs.57 a 71, doc.02, carp.01).

Siendo ello así, memora la Sala que la censura ubica como punto nodal del disenso, la falta de exigibilidad del título ejecutivo arrimado, ante el no pago de los valores consignados en las decisiones de primer y segundo grado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Puestas así las cosas, lo primero que relieves la Sala para resolver el escollo que plantea el asunto litigioso, es que el fin último de los procesos ejecutivos no es otro que la completa satisfacción por vía coactiva de las obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, que consten *en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme*¹; por lo que cristalino se muestra que las actuaciones judiciales de esta índole solo terminan por el cumplimiento o pago total de la obligación respectiva.

¹ Artículo 100 del CPTSS, y artículo 422 del CGP

De lo expuesto fluye con claridad que, los títulos ejecutivos deben gozar de dos clases de condiciones: formales y sustanciales. Las primeras, aluden a que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación sean: (i) auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva, o de decisiones que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme, perspectiva desde la cual hay que considerar que el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos.

Entre tanto, las condiciones sustanciales, apuntan a que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona, es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de dar, de hacer, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. La obligación es clara cuando no da lugar a equívocos, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación, y los factores que la determinan; es expresa, cuando de la redacción misma del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación; y es **exigible, si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, o si el plazo se hubiere extinguido, y la condición se hubiere cumplido.**

De suerte que, al momento en que el juzgador encuentre cumplidos los presupuestos arriba reseñados, libraré mandamiento de pago con la orden al ejecutado para que cumpla dentro del término legal o judicialmente establecido la obligación a su cargo que se reputa insoluta²; decisión que, conforme lo ha aquilatado la Corte Constitucional en sentencia SU-041 de 2018, *no solo tiene la característica de una providencia mediante la cual se admite la demanda porque reúne los requisitos para tal fin y da inicio al proceso respectivo, tal como ocurre en la mayoría de procedimientos y especialmente en el de naturaleza cognitiva o declarativa, sino que además, establece la competencia del juez que lo profiere para analizar los documentos que contienen la obligación cuya ejecución se pretende, pues debe encontrar acreditada la existencia de un título ejecutivo, porque satisfacen las condiciones formales y sustanciales establecidas en la ley y puede generar su cobro al ejecutado.* -Subrayado intencional de la Sala-

En línea con lo anterior, es el mandamiento de pago la decisión que cuantifica el monto de la obligación adeudada de forma inicial, o bien provisional³, en la medida en que, lo allí

² Artículo 430 del CGP
³ Artículo 424 del CGP..

dispensado es susceptible de ser modificado bien por solicitud de la parte ejecutante⁴, bien por la prosperidad de uno cualquiera de los medios exceptivos que sean formulados por la convalidada a juicio⁵; señalando en este último caso el artículo 446 del CGP que, *[e]jecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado **cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo**, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios.* -Negritas y subrayado intencional de la Sala-

En este contexto, si bien es la etapa de la liquidación del crédito, donde se concreta el valor realmente adeudado por la parte ejecutada⁶, no se pasa por alto que este ejercicio aritmético, en tratándose de ejecución por sumas de dinero⁷, debe someterse al marco y parámetros establecidos en el mandamiento de pago; de ahí que, resulte tan trascendental como necesario, que las obligaciones allí consignadas, guarden consonancia por un lado con las aspiraciones del pretensor, y por el otro, respondan al saldo efectivamente adeudado por la convocada; lo que finalmente acaece con la audiencia especial de resolución de excepciones de mérito y la posterior liquidación del crédito.

Lo anterior para significar que, sin perjuicio de los poderes oficiosos y de control de legalidad que tiene a su disposición el juez que surte la ejecución y que se consagran, entre otros, en los artículos 48 del CPTSS y 42 y 132 del CGP, los profesionales del derecho que apoderan a las partes integrantes de la litis, deben permanecer especialmente atentos para elevar de manera oportuna las solicitudes que estimen procedentes en orden a defender los intereses que le son confiados, puesto que éstos, como conocedores de las lides y materias jurídicas, son los llamados a actuar con la oportunidad y conocimiento requeridos.

En el *sub studium*, diáfano se exhibe que no resulta viable compeler a los accionados a reconocer y pagar, vía ejecutiva, el valor de las condenas dispensadas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues las partes de consuno pactaron en el contrato de prestación de servicios que el valor de los honorarios, que en últimas es lo reclamado por la impetradora, sería igual al “CUARENTA POR CIENTO (40%) DER(sic) LO RECAUDADO, bien por la vía administrativa, ora por la vía judicial; condicionamiento que no ha sido acreditado. Si como quedó dicho, era claro que la cuantía de los honorarios se encuentra sujeta a “**lo recaudado**”,

⁴ Artículos 93, 285, 286 y 287 del CGP. Corrección, aclaración y reforma a la demanda. Adición, corrección y aclaración de providencias. Artículo 28 del CPTSS. Reforma de la demanda. Artículo 65 del CPTSS. Procedencia del recurso de apelación.

⁵ Artículos 442 y 443 del CGP.

⁶ Corte Constitucional, sentencia C-814 de 2009.

⁷ Artículo 424 del CGP.

la definición de este vocablo, de acuerdo con la intención de los contratantes y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española⁸, es el de percibir en dinero; lo que de suyo comporta la necesidad de verificar que efectivamente ingresó al patrimonio de los ejecutados las sumas dinerarias contenidas en las providencias judiciales ora en la resolución 1533 de 2022 adosada, y no al resultado puro y simple de las acciones judiciales que fueran impetradas, como así aspira la accionante.

Entonces, llegados a este punto del sendero emerge una situación insoslayable, cual es, que la demanda ejecutiva es abiertamente extemporánea por anticipada, al no allegar prueba que acredite que los convalidados a juicio recibieron los dineros derivados de las actuaciones judiciales que promovieron, con lo que se opone a los postulados y requisitos plausibles de todo título ejecutivo, como lo es, la exigibilidad de la obligación cuya satisfacción se pretende, y siendo ello así, debe negarse la orden de pago solicitada.

Como corolario de lo anterior y ante la demostración de los presupuestos arriba explicitados con suficiencia, se dispondrá por la Sala la revocatoria integral de la providencia proferida el 24 de junio de 2022 por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, en la medida en que libró la orden de pago en favor de la señora CLARA VICTORIA MARTÍNEZ ARREDONDO y en contra de los señores JOSÉ DARÍO GUEVARA OSORIO y ELVIA DEL SOCORRO BEDOYA, para en su lugar, negar el mandamiento de pago solicitado por ausencia de los requisitos formales del título ejecutivo.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, no se impondrán costas procesales en esta instancia, por no haberse causado, en la medida de su no comprobación.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral,**

4. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR íntegramente el auto dictado el 24 de junio de 2022 por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL promovido por CLARA VICTORIA MARTÍNEZ ARREDONDO, y en contra de los señores JOSÉ DARÍO GUEVARA OSORIO y ELVIA DEL SOCORRO BEDOYA, y, en su lugar, NEGAR el mandamiento de pago en contra de JOSÉ DARÍO GUEVARA OSORIO y ELVIA DEL

⁸ <https://www.rae.es/drae2001/recaudar>

SOCORRO BEDOYA y en favor de la señora CLARA VICTORIA MARTÍNEZ ARREDONDO, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, según lo previsto en el artículo 41 literal c) del CPTSS.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

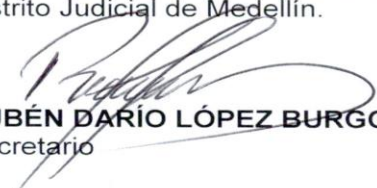
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL
Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

LA SECRETARIA DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN CERTIFICA:

Que esta providencia fue notificada en los **ESTADOS No. 130** fijados en la secretaría del Tribunal, hoy **31 de julio de 2023** a las 08:00am, los cuales pueden ser consultados en ["Publicación de Estados Electrónicos SL-TSM"](#)

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario